

NOTICARIO

PRESIDENCIA DEL SENADO

Con fechas 9 y 10 de noviembre del presente año se han recibido en esta Presidencia dos comunicaciones del Gobierno, acompañadas, respectivamente, por los textos de los acuerdos económicos y políticos de la Moncloa, y en los que se solicita un pronunciamiento de la Cámara sobre los mismos.

Dado que el acuerdo económico fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes», número 26, del día 3 de noviembre de 1977, se ordena por esta Presidencia la publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes» de los acuerdos políticos, para su general conocimiento.

Madrid, 10 de noviembre de 1977.—El Presidente del Senado,

ACUERDOS POLITICOS DE LA MONCLOA

El consenso alcanzado en el curso de las sesiones de trabajo que se han desarrollado entre el 8 y 26 de octubre de 1977, ha permitido fijar los objetivos de política legislativa a corto plazo contenidos en el presente documento.

Los objetivos de política legislativa a corto plazo propuestos se centran en la introducción de reformas parciales y urgentes para la adaptación del ordenamiento jurídico a las exigencias propias de la nueva realidad democrática. La coincidencia se expresa en torno a las siguientes líneas directrices, que no prejuzgan ni la plenitud de competencia de las Cortes para su debate y decisión, ni los términos en que haya de producirse la regulación definitiva en ejecución y cumplimiento de los mandatos constitucionales.

I. LIBERTAD DE EXPRESION

A. PRENSA

1.º Subsistirá la obligación de depósito previo de publicaciones, si bien el secuestro sólo podrá decretarse por la autoridad judicial, en virtud de denuncia del Fiscal, de la Administración Pública o de cualquier persona interesada.

2.º Cualquier denunciante podrá acompañar, con su denuncia, una propuesta de nota de rectificación, aclaración o réplica. En tal caso, la autoridad judicial dará opción a la publicación para insertar, en el número siguiente a su recepción, la nota de aclaración, rectificación o réplica. Su inserción, sin comentarios ni apostillas, comporta el perdón del ofendido y la publicación no podrá volver sobre la cuestión. En los términos indicados se entenderá cumplido el trámite de conciliación.

3.º El procedimiento judicial que, en su caso, haya de seguirse, se desarrollará en plazos breves y estrictos.

4.º La determinación de responsabilidades principales y subsidiarias se ajustará a lo establecido en el Código Penal.

5.º La Sentencia, cuando no sea absolutoria, fijará preceptivamente el importe de la indemnización por perjuicios morales. La cuantía se fijará en función de criterios objetivos.

B. Secretos oficiales

Se revisarán los supuestos legales en que pueda una materia ser declarada reservada en función de la seguridad y defensa del Estado. Los órganos competentes para hacer la declaración serán: El Consejo de Ministros y, en materia de Defensa Nacional, las Autoridades Militares.

II. MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL DE TITULARIDAD ESTATAL

1. Un Consejo provisional, integrado paritariamente por personas designadas por el Gobierno y por parlamentarios representantes de los distintos grupos con criterio proporcional:

- Elaborará y propondrá un proyecto de Estatuto Jurídico de RTVE, incluyendo criterios y normas específicas sobre tratamiento regional de los programas y, en su caso, de los servicios.
- Asumirá provisionalmente la vigilancia de la objetividad informativa y del funcionamiento general de RTVE, en especial en los aspectos referentes al gasto.

2. La Comisión de Cultura del Congreso constituirá una Subcomisión que, conjuntamente con las personas designadas por el Gobierno, propondrá a éste el tratamiento que deba darse a las Agencias de noticias, a los demás medios de comunicación social del Estado y a los procedentes de la AISS, incluyendo, respecto de las emisoras de radio, criterios y normas específicas sobre tratamiento regional de los programas y, en su caso, de los servicios.

III. DERECHO DE REUNION

La reforma de la legislación general reguladora del derecho de reunión debería efectuarse sobre la base de las siguientes premisas:

1.º Ampliación del concepto de reuniones privadas (exentas de toda intervención administrativa) a todas aquellas cuyo número no supere las cincuenta personas; las que convoquen y celebren las personas físicas en lugares de público esparcimiento por razones familiares o de amistad, siempre que la asistencia esté limitada mediante invitación nominativa; y a las propias de los partidos políticos en su funcionamiento interno, exclusivamente, aun cuando sea fuera de sus locales sociales.

2.º Régimen de libertad para las reuniones en local cerrado, con una simple comunicación previa a la autoridad administrativa, que sólo podrá

disolver el acto si durante su transcurso se producen alteraciones graves del orden, se cometa o intente cometer algún delito.

3.º Idéntico régimen—libertad con comunicación previa—para las reuniones—concentraciones en local cerrado, entendiéndose por éstas aquellas cuyo número de asistencia exceda de quinientas personas; pero con posibilidad por parte de la Autoridad gubernativa, en este caso de suspenderlas «a priori» cuando sus fines sean manifiestamente delictivos, de modificar las condiciones de su celebración y de disolverlas en los mismos supuestos que en el caso de las reuniones en local cerrado.

4.º Mantenimiento del régimen actual para las reuniones en lugares abiertos al uso público (manifestaciones): esto es, autorización previa con silencio positivo. El régimen de suspensión y disolución será el mismo previsto en el apartado anterior.

5.º Posibilidad de limitar legalmente el ejercicio del derecho de manifestación, a fin de no perturbar en exceso el desarrollo de las actividades laborales y el tráfico viario por razones de lugar o concurrencia de otras manifestaciones.

6.º Establecimiento de un proceso judicial rápido para la tutela del ejercicio de este derecho y la impugnación de las resoluciones administrativas que recaigan en este ámbito ante los tribunales de justicia.

7.º Se configurará la responsabilidad de los solicitantes o promotores por cuyo dolo o negligencia se hubieran incumplido las normas o se hubieran producido resultados delictivos o perturbadores.

Todas estas limitaciones al ejercicio del derecho tienen como fundamento primordial la salvaguarda de los derechos de los terceros y, por lo que a las manifestaciones se refiere, la garantía de la libertad de circulación privada.

IV. DERECHO DE ASOCIACION POLITICA

La reforma del ordenamiento legal que disciplina en la actualidad el ejercicio de este derecho (Ley 21/1976, de 14 de junio, y el Real Decreto-ley 12/1977, de 8 de febrero) debería acomodarse a los principios siguientes:

1.º Regulación sucinta de la estructura elemental de las asociaciones de este carácter, con el fin de que su organización y funcionamiento se acomoden a criterios democráticos.

2.º La inscripción en el Registro de Partidos Políticos se producirá por el transcurso de un plazo breve desde el depósito de los Estatutos, salvo que dentro de él se haya ejercitado acción por el Ministerio Fiscal pretendiendo la declaración judicial de su ilegalidad y el Juez haya decretado la suspensión de la inscripción.

3.º Competencia judicial exclusiva para la suspensión o disolución de las asociaciones.

4.º Establecimiento de un proceso judicial sumario para conocer y resolver todos estos supuestos ante los Tribunales de Justicia.

5.º Regulación de un sistema de financiación estatal a los partidos políticos, mediante el establecimiento de un sistema objetivo de subvenciones en función de los resultados electorales obtenidos.

V. CODIGO PENAL

Con carácter urgente se absorberán las siguientes reformas:

A. Relacionadas especialmente con la mujer:

1.º Despenalización del adulterio y el amancebamiento (artículos 449 a 452 y último párrafo del artículo 443 con modificación de concordantes en el Código Civil).

2.º Regulación de la expedición de anticonceptivos, límites de publicidad y consiguiente despenalización.

3.º Modificación de las edades de la mujer tomadas en consideración para la tipificación del rapto (artículos 440 y siguientes) y del estupro (artículos 434 y siguientes).

B. Relacionadas con las Leyes Fundamentales y referencias al Movimiento Nacional:

1.º Despenalización en general y particularmente las referencias del Capítulo I, Título II.

2.º Supresión de la Sección 4.ª (delitos contra las Leyes Fundamentales).

C. Relacionadas con las libertades públicas:

1.º Reuniones y asociaciones ilícitas.

Modificación de los artículos 166, 172 y concordantes estableciendo una nueva tipificación que comprenda sólo los fines contrarios a la moral pública o en general a la comisión de algún delito. Se mencionará también especialmente la utilización de medios violentos dentro de la tipificación y se protegerá el pluralismo político.

2.º Propagandas ilegales.

Estos delitos desaparecerán como figuras sustantivas. La protección penal de la libertad de prensa se hará a través del Código Penal en general, reintroduciendo la figura de la apología del delito y con las especialidades imprescindibles en la tipificación de delitos de prensa e imprenta.

3.ª Nueva tipificación de las conductas contrarias al ejercicio de las libertades públicas y al respeto de la persona en la actuación de los funcionarios públicos.

D. Revisión de cuantías:

En línea semejante a lo prevenido en la Ley 39/1974, de 28 de noviembre, se elevarían las cifras consignadas en el Código Penal como cuantía, valor o cantidad objeto del hecho punible, lo que llevaría indirectamente una rebaja general de las penas ya impuestas o por imponer en los delitos tipificados en virtud de dichas cifras. La desvalorización del dinero en los últimos tres años justifica, además, esta medida, que irá unida a una reconsideración de las cuantías de las multas al alza, pero no automáticamente, sino en virtud de los nuevos criterios de política criminal.

VI. LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

1.º Asistencia letrada del inculcado desde el momento en que se adopte una medida restrictiva de la libertad.

2.º Restablecimiento de la libre decisión de los Jueces respecto de la situación del procesado, con modificación consiguiente del artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

VII. CODIGO DE JUSTICIA MILITAR

Reconsideración de sus límites en relación con la competencia de la jurisdicción militar:

1.º Por razón de delito: resolver la dualidad de tipificaciones entre el Código Penal Común y el Código de Justicia Militar, restringiéndose éste al ámbito de los delitos militares.

2.º Por razón de lugar: limitar la competencia de la jurisdicción militar a los actos cometidos en centros o establecimientos o lugares estrictamente militares.

3.º Por razón de la persona: revisar los supuestos de desafuero y los términos en que se resuelve la competencia cuando concurre personal militar y no militar en unos mismos hechos que no constituyan delito militar.

4.º *Sometimiento a los Tribunales Ordinarios de las Fuerzas de Orden Público*, cuando actúen en el mantenimiento del mismo.

5.º Fortalecimiento de las garantías procesales y de defensa en los procedimientos de la jurisdicción militar.

VIII. ORDEN PUBLICO

1.º Revisión parcial de la Ley de Orden Público, de acuerdo con los criterios que a continuación se expresan. Su vigencia temporal será limitada, dado que una nueva regulación global y sistemática deberá ser en su momento adoptada, en función de las previsiones que figuren en la Constitución.

2.º Nueva definición del concepto de orden público, depurándolo de contenidos no democráticos y asentando su fundamento esencial en el libre, pacífico y armónico disfrute de las libertades públicas y el respeto de los derechos humanos.

El orden público tendrá una proyección concreta y actual en cuanto protección del avance en la consolidación de la democracia y defensa frente a las agresiones de todo orden y especialmente las terroristas. La tipificación del terrorismo figurará en el Código penal común, con eliminación de lo que al respecto figure en leyes especiales y se operará con los criterios generalmente aceptados en los Convenios Internacionales y en los países de Occidente.

3.º Se fortalecerá la protección penal de que deben ser objeto las Fuerzas de Orden Público.

4.º La potestad sancionadora en materia de orden público se ajustará a los principios siguientes:

- El acto sancionador no podrá dictarse sin previa audiencia del interesado.
- Se evitará la doble sanción por un mismo acto, tanto entre sanciones administrativas como entre éstas y las penales.
- Se eliminará toda exigencia de pago previo como requisito para recurrir contra la sanción.
- No habrá responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas.
- Serán meramente potestativos los recursos administrativos previos a la impugnación jurisdiccional de la sanción. El procedimiento de revisión jurisdiccional será breve y la autoridad judicial ante la que se interponga el recurso podrá decretar la suspensión de la ejecución del acto en tanto se sustancia el procedimiento.
- Las autoridades gubernativas con facultad sancionadora para la protección del orden público serán los Gobernadores Civiles, el Director General de Seguridad y el Ministro del Interior.

5.º Se potenciará la capacidad de acción de los poderes públicos y la participación ciudadana para la protección y defensa civil en supuestos de emergencia (funcionamiento de servicios públicos esenciales, desabastecimiento de productos de primera necesidad, emergencias sanitarias, catástrofes naturales, etc.).

6.º En cuanto exigen partir de la regulación constitucional sobre suspensión de garantías, se excluyen de esta temática los estados de excepción y de guerra.

7.º Se fortalecerán los medios de prevención y defensa frente al terrorismo. A este respecto, en particular, se creará una unidad de policía judicial, dependiente de los órganos judiciales competentes para la investigación de delitos terroristas, y que bajo las órdenes directas de la autoridad judicial, y al amparo de las autorizaciones otorgadas por la misma, pueda desempeñar con eficacia y prontitud la función investigadora requerida.

IX. REORGANIZACION DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE ORDEN PUBLICO

1. Estructuración de los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público en dos grandes sectores: un Cuerpo civil (Cuerpo General de Policía) encargado fundamentalmente de la investigación criminal (prevención y persecución de los delitos y faltas); y dos Cuerpos Militares (Policía Armada y Guardia Civil), como Cuerpos operativos para el mantenimiento de la paz pública, seguridad ciudadana, ejercicio de los derechos y libertades y guarda física de los espacios urbanos y rurales.

2. El mando de las Fuerzas de Orden Público deberá recaer en el Ministro del Interior y, más inmediatamente, en un Director de Seguridad del Estado, con categoría de Subsecretario o de Secretario de Estado. El Ministerio del Interior, no obstante, ejercerá el mando sobre la Guardia Civil so-

lamente en lo que afecte al mantenimiento del orden público, dada la pertenencia de este Cuerpo a las Fuerzas Armadas y su dependencia, por consiguiente, del Ministerio de Defensa.

3. Los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público operarían sobre la base de una distribución funcional y territorial de competencias: la policía gubernativa (esto es el Cuerpo General de Policía y la Policía Armada), en las zonas más conflictivas y en las unidades urbanas de mayor población, y la Guardia Civil en las restantes, sin perjuicio de sus misiones funcionales genéricas en orden a la disciplina del tráfico, custodia de inmuebles, armas y explosivos, resguardo fiscal y de fronteras, y de sus funciones como policía judicial y gubernativa en las primeras fases de investigación y prevención de delitos y faltas, en las zonas atribuidas a dicho Cuerpo.

4. Adopción de una serie de medidas tendentes a la progresiva intercomunicación entre los Cuerpos de la Policía Armada, Guardia Civil y Cuerpo General de Policía.

5. Reforzamiento de los Cuerpos administrativos auxiliar y subalterno de la actual Dirección General de Seguridad, que libere a los funcionarios del Cuerpo General de Policía, Guardia Civil y Policía Armada del desempeño de funciones burocráticas. Aquellos Cuerpos, sin perjuicio de los derechos adquiridos, podrían nutrirse de los miembros de los Cuerpos Militares antes mencionados, al pasar a la situación de retiro, y según su diferente categoría o graduación, con lo que se conseguiría no sólo prolongar la vida activa de un importante contingente, sino también garantizar una continuidad en la función muy deseable.

6. Perfeccionamiento del régimen de formación del Cuerpo General de Policía y establecimiento de un sistema de especialización para los oficiales del Ejército de Tierra que pasen a incorporarse a los cuadros de mando de la Policía Armada, tendiendo a una dedicación progresivamente prolongada de estos oficiales a la Policía Armada.

7. Creación de unidades especiales de policía judicial, para el servicio directo de la labor encomendada a los Jueces y Tribunales de todo orden, con sujeción a los principios de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

8. Creación de unidades tendentes a dar un servicio de lo que en otros países se conoce con el nombre de «policía de barrio», para la atención directa y permanente a los vecinos.

9. Establecimiento de un régimen claro de división de competencias entre las funciones encomendadas a los Cuerpos y Fuerzas de Orden Público estatales y las atribuciones a las policías locales, sobre la base de un fortalecimiento de las competencias de estas últimas (fundamentalmente en atención al mantenimiento del orden en las vías urbanas).

10. Reforma del Reglamento Orgánico de la Policía Gubernativa, de conformidad con los principios enunciados en los apartados anteriores.

Firmado en Madrid, a 27 de octubre de 1977.—**Adolfo Suárez González, Felipe González Márquez, Joan Reventós i Carner, Enrique Tierno Galván, Juan Ajuriaguerra Ochandino, Miguel Roca Junyent, Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, Santiago Carrillo Solares.**

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

El Pleno del Senado, habiendo conocido los textos de los referidos acuerdos, y amparándose en la facultad de examen de las comunicaciones del Gobierno que le reconoce el artículo 11 de su Reglamento, ha adoptado, en su sesión del día 11 de noviembre, y a propuesta unánime de los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, la siguiente

RESOLUCION

El Senado

Habiendo conocido, a través de la comunicación remitida por el Gobierno, los acuerdos económicos y políticos de la Moncloa y la resolución del Congreso de los Diputados de 27 de octubre de 1977.

Teniendo en cuenta las declaraciones de los Portavoces de los Grupos parlamentarios y del Gobierno en la sesión de hoy,

Resuelve

Estimar que los acuerdos de la Moncloa son base imprescindible para afrontar la crisis económica y consolidar la democracia.

Considerar satisfactoria la firma de los mencionados acuerdos, por juzgarlos positivos.

Instar al Gobierno a su más rápido cumplimiento, mediante la adopción de las medidas de su competencia y la remisión a las Cortes de los proyectos de ley necesarios para su ejecución.

Asumir, como Cámara colegisladora, la responsabilidad que le corresponde en el desarrollo legislativo de los acuerdos, así como la función de control sobre su debido cumplimiento.

Pedir a todos los Grupos políticos y fuerzas sociales que colaboren solidariamente y presten su apoyo para la superación de la crisis y la consolidación de la democracia.

Palacio del Senado, 11 de noviembre de 1977.

(«B. O. de las Cortes», núm. 32, de 17 noviembre 1977).

JORNADAS EUROPEAS DE DEFENSA SOCIAL SOBRE
CRIMINALIDAD ECONOMICA

Se han celebrado en Roma las Jornadas Europeas de Defensa Social sobre la Criminalidad Económica, promovidas por la Sociedad Internacional de Defensa Social bajo el patrocinio de las Naciones Unidas y organizadas por el Ministerio de Justicia de Italia, con la colaboración del Centro Nazionale di prevenzione e Difesa Sociale.

La presidencia efectiva de las jornadas estuvo a cargo de los Ministros Bonifacio y Pandolfi, de Justicia y de Hacienda, del Senador Guido Gonnella, ex Ministro, y del Presidente Marc Ancel.

Fueron sus temas La Criminalidad Económica, Delitos Financieros Co-

metidos por Sociedades Mercantiles (aspectos jurídicos, sociológicos, económicos y criminológicos) El abuso de la financiación pública y la evasión fiscal.

Asistió medio centenar de personalidades de Europa, Africa y América, invitadas por el Ministro de Gracia y Justicia italiano. De España lo fueron el catedrático don Marino Barbero Santos y el abogado de Madrid don Pascual Meneu Monleón.

El Ministro Bonifacio, en su discurso inaugural, recordó las recomendaciones sobre el tema primero, problemática de la criminalidad económica en el mundo contemporáneo, adoptadas por la Conferencia de Ministros de Justicia del Consejo de Europa (Estocolmo 1972) y las del V Congreso sobre prevención del delito y tratamiento de delincuentes, de las Naciones Unidas.

Subrayó las profundas conexiones entre criminalidad económica, por una parte, y delincuencia común y violencia política por otro, así como el contexto social y moral en que aquélla florece más y más.

Critica el uso desviado y antisocial del poder económico, que no ha de tener nunca franquicias o inmunidades, dados los graves daños de todo orden, y en cifras astronómicas, que comporta para la sociedad Estigmatizó fenómenos ya por desgracia muy frecuentes y que han de sancionarse y evitarle a toda costa en una comunidad sana y bien organizada: delitos financieros en las empresas, criminalidad económica en general, evasión fiscal en primer lugar, abuso de la financiación pública, etc.

Sobre estos temas generales, previamente recibieron los delegados e invitados, medio centenar aproximadamente, valiosos documentos de trabajo, obra de autoridades en la materia cual los magistrados, profesores o abogados señores Di Gennaro, Tiedeman, Delmas-Marty, Zybon, Frey, Szabo, Vetere, Motzo, Dell Andro y Brancaccio; el magistrado del Tribunal de Casación francés M. Cosson hizo la síntesis de los trabajos. El Presidente de la Cámara, autoridades judiciales y académicas asistieron a los debates, de gran altura e impacto en la opinión, cual evidencian las destacadas crónicas que la prensa del Vaticano, de Roma e internacional han dedicado a estas jornadas.

En la sesión de clausura intervinieron los Presidentes de la Sociedad Internacional de Defensa Social, Fundación Internacional Penal y Penitenciaria y Sociedad Internacional de Derecho penal, cuya sección española acaba de constituirse, con veinte años de retraso sobre los proyectos de Graven (Rector de Ginebra), Bouzat (decano de Rennes) y Quintano Ripollés (Magistrado del Supremo, Madrid), entre otros.

Los invitados españoles Barbero y Menéu, veteranos en los trabajos de Defensa Social desde el famoso congreso de Lieja (1949), fueron muy felicitados en este importante evento.

MENÉU